

Capítulo 4

Nuevas fracturas en el México profundo: neoliberalización e insustentabilidad social

Introducción

México es un país subdesarrollado y dependiente que, sin embargo, no es considerado como tal por su clase política, grandes empresarios, academia convencional y medios de comunicación. En el discurso del poder, el país representa una economía exitosa, globalizada y pujante, que si padece los impactos de la crisis, es porque ésta viene de fuera, pues se asume que la política en boga está dotada de responsabilidad. Para el *mainstream*, el modelo económico basado en las exportaciones es el adecuado, y los continuos sobresaltos se deben a que no se ha profundizado lo suficiente en la aplicación de las reformas estructurales. Ante la crisis, la respuesta es “mercado, mercado y más mercado”. No en balde los organismos financieros internacionales han considerado a México como un caso exitoso en la aplicación de las políticas de ajuste estructural, emanadas del Consenso de Washington. En esta línea, el país se agrega a los países gobernados por fuerzas políticas conservadoras, como Colombia, Perú, Costa Rica y Honduras, que configuran el polo de derechas abocado a preservar el neoliberalismo y resistirse a los proyectos de corte posneoliberal que, desde distintas posiciones, se ensaya en buena parte del subcontinente, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, en su vertiente más radical, además de Argentina, Brasil y Uruguay, en una franja intermedia moderada. Por lo mismo, México ha perdido liderazgo en América Latina.

En el plano interno, el modelo económico ha sido tremendamente exitoso para consolidar el poderío económico y político de la élite social. Pero a costa de incrementar las desigualdades sociales, depredar el medio ambiente, fracturar las relaciones sociales y acrecentar las asimetrías en el con-

texto de la economía mundial. En esa tónica, el país se consolida como un país subdesarrollado, sin un futuro promisorio.

El subdesarrollo no es un estado mental de inferioridad que caracterice a un pueblo derrotista, ni una actitud social de sometimiento antropológico poscolonial, ni una cultura de la subalternidad por elección. Tampoco es una incapacidad tecnocrática para aplicar innovaciones y aplicaciones prácticas de la ciencia, ni una situación de atraso permanente. Es algo más complejo, que acepta una conceptualización genérica, pero que se remite a casos específicos. En México se privilegian los intereses de las grandes corporaciones capitalistas nacionales y extranjeras, que buscan a toda costa acrecentar sus márgenes de ganancia. El excedente generado, gracias a múltiples esfuerzos sociales, se lo apropia, de manera desproporcionada, una pequeña élite social, que en mayor medida es desviado no a mecanismos de reinversión, sino al consumo improductivo, el despilfarro, la financiarización y la transferencia de excedente hacia el exterior en distintas modalidades. Con ese cometido, las fuentes principales de la riqueza social, el ser humano y la naturaleza, son superexplotadas y reducidas a su condición de insumo productivo, a mercancía desechable. En este trance, los trabajadores terminan convertidos en una mercancía humana desechable, al ser sometidos a una explotación acentuada, sin importar que la reproducción familiar esté en predicamento. La destrucción sistemática de la red de protección social también contribuye a la superexplotación laboral. En tanto que la naturaleza es devastada, sin importar la pérdida de biodiversidad y el desmantelamiento de las bases naturales para la producción. El Estado social también es desarticulado con el propósito de succionar la mayor cantidad de recursos y activos públicos para conducirlos hacia la órbita privada.

Modelo neoliberal nacional

La definición más difundida sobre neoliberalismo se refiere a las políticas de ajuste estructural que se resumen en la tríada de privatización, desregulación y liberalización. En su versión ampliada se hace referencia al decálogo del llamado Consenso de Washington. La mayoría de las veces se interpreta como un paquete de políticas centradas en el mercado. El término neoliberalismo se asocia también al de globalización, por lo que se habla de globalización neoliberal. En muchos textos se confunde globalización con neoliberalismo. Desde una visión crítica, se entiende por neoliberalización el proceso de concentración de capital y empoderamiento de una pequeña

élite transnacional y el proceso concomitante de destrucción y reorientación de la economía nacional.

El neoliberalismo es una teoría e ideología que aboga por el libre mercado, la inversión privada y el individualismo, en detrimento del papel del Estado, la protección social y la solidaridad. En la práctica, el proceso de neoliberalización se refiere a la generación de espacios de valorización y nuevas fuentes de riqueza para el gran capital. El Estado es un agente central que garantiza la maximización de ganancias y desmantela la responsabilidad social del capital y al propio Estado. Para ese propósito se implementan las políticas de ajuste estructural, la precarización laboral y la reinserción subordinada a la economía mundial. Se trata también de resarcir y apuntalar el poder político y económico de las élites sociales. El neoliberalismo, por lo contrario, no tiene el propósito de generar empleo, mejorar el nivel de vida de la población y alentar la dinámica económica. Por lo cual, no es certero el argumento de que, ante la evidencia de falta de crecimiento, desempleo y pobreza, el neoliberalismo ha fracasado, pues, en cambio, ha logrado reforzar el poderío de las élites, incrementar las desigualdades sociales, concentrar capital y acrecentar los márgenes de ganancia.

En este punto, nos interesa resaltar tres rasgos básicos del proceso de neoliberalización: 1) el desmantelamiento del Estado social y la consecuente reconfiguración política del Estado como una instancia representativa de los intereses exclusivos de la oligarquía nacional y transnacional; 2) las desigualdades sociales como motor de la economía y de la participación del país en el proyecto de la llamada globalización. La existencia de supermillonarios que controlan los hilos económicos y políticos frente a una inmensa mayoría de personas que subsisten con los recursos más elementales, y aun prescindiendo de ellos. Ante el declarado nuevo interés supremo de la sociedad, la búsqueda de competitividad de la economía, se ofrece abundante fuerza de trabajo barata como factor de atracción de la inversión privada que, se argumenta, es el único medio para activar el crecimiento económico y generar fuentes de empleo, ante una supuesta incapacidad congénita del Estado —corrupto, obeso e ineficiente, se diría—. El empresario es el prohombre del sistema, por lo que si le va bien al empresario, algún día, sólo algún día, le puede ir bien al resto de la sociedad. Hoy, como ayer, la conseja es apretarse el cinturón. Sacrificarse en el presente, para que otras generaciones, o, en otro mundo, vivan mejor; y 3) las principales fuentes de riqueza de toda sociedad, la población y la naturaleza, aparecen como recursos abundantes y baratos, que pueden ser derrochados sin remordimientos, en aras de la obtención de ganancias abultadas y prontas. La nueva ética del desarrollo

neoliberal aconseja flexibilizar el mercado laboral, adoptar políticas de precariedad y despido libre. El trabajador es una carga para el empresario exitoso, por lo que no está de más exprimir las fuerzas vitales del trabajador; no tolerar ningún reclamo y deshacerse de él para eludir responsabilidades en materia de prestaciones e incrementos salariales. Siempre es preferible reciclar a trabajadores en espera, que con tal de incursionar en la órbita laboral, están dispuestos a aceptar condiciones laborales deprimentes. En tanto que los recursos naturales se dilapidan o se mercantilizan para generar espacios de valorización atractivos.

La interpretación convencional de la economía mexicana descansa en los preceptos del nacionalismo metodológico: las condiciones endógenas determinan (por ejemplo, política estatal) la dinámica económica; en el extremo opuesto se encuentran los enfoques que achacan al sector externo la determinación de la dinámica nacional (por ejemplo, tesis imperialista radical y tesis globalista). No obstante, se trata de distintos niveles de abstracción que están interrelacionados: el desarrollo desigual bajo la integración regional de América del Norte y el patrón de acumulación nacional basado en la exportación de fuerza de trabajo barata. A partir del eslabonamiento de esos niveles, se puede comprender la emergencia de procesos clave: desmantelamiento de la economía mexicana; imposición del modelo neoliberal orientado hacia el proceso de acumulación de la economía estadounidense; la generación de sobrepoblación, precarización, informalidad y migración forzada.

La neoliberalización es concebida como un proceso que desmantela la economía nacional y reorienta sus sectores más dinámicos hacia el exterior con el propósito velado de transferir excedente económico, recursos naturales y fuerza de trabajo barata. El saldo es sintomático, por una parte se acentúan las desigualdades sociales (pobreza, precarización, informalidad y violencia) frente a una dinámica de concentración de capital, poder y riqueza; y por otra parte se acentúan las asimetrías económicas entre México y Estados Unidos. En resumidas cuentas, el modelo neoliberal vulnera las dinámicas de crecimiento y acumulación nacionales y coloca al país en una situación de crisis permanente con cariz multidimensional.

Luego del desmantelamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, la implosión de la llamada crisis de la deuda y la reestructuración del capital internacional, en México se impone desde el poder del Estado el modelo neoliberal. Entre las primeras disposiciones se encuentra el desmantelamiento del Estado benefactor, la privatización de empresas públicas y la contrarreforma agraria. Posteriormente se afianza con la instrumentación del Tratado de Libre Comercio de América del Nor-

te (TLCAN) centrada en las necesidades de la reestructuración productiva estadounidense. No obstante, las falsas promesas de incorporar al país a la senda del desarrollo pronto mostraron su verdadero rostro.

El gestor principal es el Estado, que hace las veces de un Estado mínimo, pues abandona la función de rector y gestor del desarrollo y renuncia a la mayoría de sus atribuciones como garante del bienestar social, para cubrir las exigencias del capital privado: un régimen legal favorable a la privatización, un clima favorable a los negocios, un ataque sistemático en contra del trabajo y los trabajadores. El gobierno adopta criterios de la gerencia empresarial, para ser un gobierno facilitador de la inversión privada que ofrece garantías y recursos a las grandes corporaciones. Además, se prohíja una clase política corrompida, defensora de los intereses capitalistas y promotora entusiasta de las reformas de ajuste estructural de corte proempresarial. Los poderes fácticos también están coaligados en ese propósito.

Entre los elementos básicos del modelo neoliberal podemos destacar los siguientes: 1) transferencia de excedente económico a través del pago de la deuda externa, el pago de la renta tecnológica (patentes, franquicias, etcétera), remisión de ganancias corporativas, beneficios por comercio intrafirma; 2) intercambio desigual por deterioro de los términos de intercambio, desmantelamiento de sectores productivos merced a la apertura comercial indiscriminada; 3) despojo por la cesión de bienes estratégicos de la nación y de bienes comunes, y enajenación de empresas públicas y privadas de sectores estratégicos y rentables; 4) superexplotación del trabajo inmediato y subsunción del trabajo conceptual, y 5) depredación de la naturaleza. El objetivo general de este modelo de desarrollo atiende en realidad a un proyecto de clase, pues se pretende concentrar el poder, la riqueza y el capital en manos de una pequeña élite social, nacional e internacional, que detenta el control de los sectores económicos, políticos y naturales estratégicos.

Los costos sociales, ambientales y territoriales del modelo resultan catastróficos en términos humanos.

Neoliberalización a la mexicana

Durante las últimas tres décadas y media, en el mundo periférico y subdesarrollado se ha impuesto un modelo de desarrollo basado en los grandes capitales monopólicos y oligopólicos, que socava el control nacional de los recursos materiales y humanos y genera nuevas fuentes de riqueza en beneficio del gran capital. En México, el neoliberalismo se impone desde el Estado, con la intención de entregar sectores y empresas estratégicas y rentables al sec-

tor privado; responder a los requerimientos de las instituciones financieras internacionales, que reclaman, entre otras cosas, garantías de pago de la deuda externa; derrocar a la clase política identificada con el nacionalismo-revolucionario para abrir espacios de decisión a la tecnocracia; afianzar un proyecto de gobierno transexenal y transpartidista de estirpe neoconservadora o de derecha; descargar al Estado de las responsabilidades sociales con sectores de subsistencia, que formaban la base electoral del populismo, como el campesinado, el sector popular y laboral, mismos que, a su vez, integraban los sectores corporativos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en su calidad de partido de Estado. El nuevo proyecto instaaura un nuevo sistema político y económico, y nuevas relaciones entre el Estado y ciudadanía. La implantación del nuevo modelo no generó movilizaciones de inconformidad de gran calado, pues en ese entonces el partido de Estado detentaba una hegemonía consolidada.

La destrucción del modelo de desarrollo nacional derroca el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y desmantela el Estado social y la economía de subsistencia. En tal sentido, es emblemático el cierre o pulverización de empresas paraestatales como Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), Fertilizantes Mexicanos (Fertimex) y Ferrocarriles Nacionales (Ferroviales). Programas como el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Muchas empresas rentables fueron privatizadas, como Teléfonos de México (Telmex). En tanto, se emprende una serie de contrarreformas, como las modificaciones al artículo 27 constitucional, que prácticamente desmantela al sistema de producción ejidal.

Un puntal del modelo es la integración subordinada y profunda a Estados Unidos, mediante la suscripción del TLCAN. Los sectores estratégicos se abren para permitir una entrada indiscriminada de capitales extranjeros interesados en apropiarse de los abastos de recursos naturales y de los bancos de fuerza de trabajo barata, para exportar desde México a Estados Unidos. También se instalan empresas comerciales y de servicios de procedencia multinacional para aprovechar el mercado de consumo del país. La economía mexicana tiende a la monopolización y extranjerización. En México predominan las empresas transnacionales estadounidenses, europeas y asiáticas, como Nissan, Volkswagen, Ford, General Motors, Coca-cola, Pepsico, BBVA, Santander, Citigroup. Y en menor medida empresas mexicanas, como Telmex, Pemex, Cemex, Televisa, Soriana.

Entre los rasgos básicos del proceso de neoliberalización implementado en el país, podemos destacar los siguientes:

1. *Desmantelamiento del modelo previo.* El modelo que fue desmantelado estaba organizado políticamente por el partido de Estado, el PRI, cuya hegemonía no conocía contrincantes electorales reales al amparo de una ideología, el nacionalismo revolucionario, que se decía heredera del movimiento armado de 1910 y cuya función principal era avalar el sistema presidencialista antidemocrático y el control político de la sociedad mediante el corporativismo de sectores clave de la sociedad: los trabajadores a través de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); el sector campesino por la Confederación Nacional Campesina (CNC), y el sector popular, por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). La cultura política de la corrupción, la demagogia y el populismo marcan la pauta. No obstante, un dato sintomático es que el modelo económico fue trastocado desde la cúspide del poder, sin necesidad de promover la alternancia electoral ni consultar a la población: fue una imposición autoritaria, que aunada a su fuerte contenido antipopular, configuró una contrarrevolución política de gran envergadura. Éste fue el punto de inflexión más importante de los últimos tiempos, que no fue producto de una movilización social ni de un cambio democrático. La imposición del neoliberalismo no obedeció a un programa de gobierno original (el liberalismo social), como argumentaban sus proponentes, sino que fue una adaptación sumisa a los dictados del Consenso de Washington y sus programas de ajuste estructural, diseñados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El viraje hacia la derecha neoliberal trajo consigo el desmantelamiento de la institucionalidad que daba rostro al Estado social y su red de protección. Instancias como Coplamar, Conasupo, Fertimex, Pronase y Banrural, que servían a la economía campesina, fueron destruidas para desestructurar la producción social rural y favorecer a los agroexportadores y agroindustrias nacionales y extranjeras. El sistema de seguridad social también ha sufrido múltiples embates y formas de privatización encubiertas. Los servicios de salud pública, encabezados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han sufrido un grave deterioro, y se ha alentado la participación de empresas privadas en la provisión de medicamentos y servicios médicos. La incipiente industrialización prohijada por el modelo de sustitución de importaciones también fue trastocado.
2. *Nuevas fuentes de generación y apropiación de riqueza.* El interés primordial es crear nuevas fuentes de generación y apropiación de riqueza o nuevos espacios de valorización para el gran capital a costa de la producción

social, las condiciones de trabajo y la preservación de la naturaleza. Los bienes de la nación, los bienes comunes y los sectores económicos estratégicos se despojan y reasignan a los grandes capitales. El objetivo central es maximizar la riqueza sin importar los costos sociales y ambientales. En el trance, pierden los productores del campo, como ejidatarios y pequeños propietarios, además de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que son desplazadas por las grandes empresas nacionales y extranjeras. Las microempresas, los llamados “changarros”, siguen siendo las principales generadoras de empleo, pero en el mayor de los casos se trata de establecimientos de autosubsistencia, que incluso no pagan salarios, pues son empresas familiares. Bajo este modelo, pierde sentido la gestión estatal del desarrollo y actividades estratégicas, como la planeación del desarrollo, pues todo se deja a las “libres fuerzas del mercado”. Desaparece la Secretaría de Planeación y Presupuesto y la atención se vuelca hacia la Bolsa Mexicana de Valores. Entre las principales fuentes de riqueza se encuentra la abundancia y baratura de fuerza de trabajo, los recursos naturales baratos (minerales, petróleo, madera, gas, agua), las empresas públicas y privadas adquiridas por la inversión extranjera.

3. *Configuración de una coalición de poder.* El nuevo modelo identifica a las grandes empresas privadas como el agente de desarrollo y al Estado como generador de las condiciones que garanticen la máxima ganancia corporativa. El poder económico y político se funden en una coalición neoliberal que suma a los poderes del Estado y a los llamados poderes fácticos que ejercen un programa de gobierno desvinculado de los intereses nacionales y populares. Entre los componentes más importantes de esta coalición se encuentra la clase política, la burocracia política, los gobernantes, las grandes empresas, el alto clero católico, el ejército y los grandes medios de comunicación masiva, destacadamente Televisa y TVAzteca, y las grandes cadenas radiofónicas y periódicos, además de intelectuales palaciegos. La coalición es capitaneada por la unión PRI-PAN, que condensa la supuesta transición política en un simple pacto político transexenal. Estos partidos se alternan la presidencia de la República sin sobresaltos, comandan la mayoría de las cámaras de Diputados y Senadores, controlan la mayoría de las gubernaturas y presidencias municipales, y controlan los órganos llamados autónomos y ciudadanos, además de que inciden en la conformación de las piezas clave del Poder Judicial. Las organizaciones empresariales, como el Consejo Mexicano de la Comunicación y la Coparmex,

actúan como grupos de presión y de respaldo al gobierno neoliberal. La concentración de poder político es un elemento capital para la preservación del nuevo modelo. Esto conlleva la cerrazón y el vituperio hacia expresiones políticas opositoras y alternativas.

4. *Monopolización y extranjerización de las fuerzas económicas.* El desmantelamiento del modelo previo, la acumulación por despojo y la reinserción a la economía mundial propician una fuerte monopolización de la economía mexicana, además de un predominio de las corporaciones extranjeras en los sectores más dinámicos y rentables. La economía mexicana está controlada por monopolios y oligopolios. Entre los más representativos podemos mencionar los sectores de telecomunicaciones: Telmex, Televisa y TVAzteca; banca comercial: Bancomer (BBVA), Banamex (Citigroup), HSBC, Santander y Scotiabank; alimentos y bebidas: Bimbo, Nestlé, Coca-Cola, Pepsicola, Modelo, Maseca; comercio minorista: Wal-Mart, Cosco, Soriana y Oxxo; materiales para construcción: Cemex; mineras: Peñoles, Minera México. Los grandes monopolios no sólo trastocan los patrones de consumo, especulan con los precios, generan burbujas especulativas y producen carestía entre la población pobre, sino que también implementan estrategias que destruyen a la competencia, es decir, destruyen fuentes de empleo, desarticulan el aparato productivo, fracturan las cadenas productivas e imponen regímenes de trabajo barato e inseguro. A cambio obtienen fabulosas ganancias, muchas de las cuales son transferidas hacia el extranjero, a sus casas matrices, por lo que reinvierten un monto pequeño. Aun las empresas de base nacional recurren a la transferencia de capitales hacia el exterior, bajo las estrategias especulativas de la financiarización. En conjunto, las grandes corporaciones están abocadas a extraer la mayor cantidad de ganancia, pero tienen poco interés en promover la mejora en la calidad de vida de la población y respetar el medio ambiente.
5. *Desigualdades sociales y diferenciación regional.* El avance progresivo de la neoliberalización tiene como condición de posibilidad la expansión de las desigualdades sociales y la diferenciación regional. En el primer punto se trata del objetivo central, por el cual puede llamarse un proyecto exitoso de clase, de que una pequeña élite social, una oligarquía, amase la mayor cantidad de riqueza, concentre el capital, detente el poder y controle políticamente a la población. En contrapartida, se gesta una enorme masa de población pobre, despojada y oprimida que es excluida del modelo en su calidad de productor, consumidor y ciudadano. En tanto, las franjas me-

días de la población se van achicando y sus expectativas de ascenso social se ven frustradas. Las desigualdades sociales constituyen, a fin de cuentas, un componente importante del modelo, pues primero es requerido que los recursos bajo control de los pobres sean liberados y mercantilizados para reinsertarlos en la órbita de valorización, y en segundo término es menester que la propia fuerza laboral sea liberada, es decir, sea convertida primero en sobrepoblación y luego en fuerza de trabajo barata y disponible para las necesidades del capital. La abundancia y baratura del trabajo se oferta como una ventaja comparativa de la nación, como un poderoso factor de atracción de la inversión extranjera. El segundo punto se refiere a la segregación de localidades, municipios y regiones que salen de la órbita de modernización neoliberal, cuyos territorios y poblaciones no interesan a los proyectos de inversión pública y privada, y que son marginales. En el otro polo se ubican zonas metropolitanas que concentran las actividades financieras, productivas y políticas de la nación, y que están conectadas, a su vez, con las grandes urbes del capitalismo mundial, donde están ubicadas las casas matrices, las grandes bolsas de valores o los centros de decisión internacional. La ausencia de un plan de desarrollo nacional segrega y vulnera drásticamente a amplios contingentes de población y a vastas regiones del país.

Poderío económico, político y mediático

El desmantelamiento económico prohija la concentración económica. El resultado es que se consolida un “capitalismo de compadres”, es decir, una élite social, nacional y extranjera, que controla la economía y la política bajo esquemas monopólicos y que se reparte la riqueza nacional. Con el ascenso al poder del grupo político encabezado por Carlos Salinas de Gortari se implementa un profundo programa de privatización que ofrece en bandeja de plata, a empresarios afines al gobierno, empresas públicas saneadas y rentables, como Teléfonos de México (Telmex), TVAzteca, la banca nacional, entre múltiples empresas. Los beneficiarios del proceso de privatización se suman a los grandes empresarios nacionales y a los grandes inversionistas extranjeros para configurar una oligarquía que detenta el poder económico y político (Delgado, 2009; López Obrador, 2010).

Pese a que no es clara la metodología de la revista *Forbes* para medir la fortuna de los magnates del mundo, no deja de ser ilustrativo el que contemple entre los más ricos del planeta a personajes como Carlos Slim dueño entre otras grandes corporaciones, de Telmex, y Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, líder del

Cártel de Sinaloa. Pero más allá de los nombres y apellidos de los supermillonarios, es importante hacer notar que, de manera creciente, el capital asume una figura abstracta, merced a que son grandes corporaciones, fondos de inversión y juntas de accionistas los que asumen el control de los sectores económicos clave de la economía nacional. Estas entidades no figuran con nombres personales, sino como corporaciones capitalistas multinacionales o entidades financieras. Ante la pregunta de quiénes son los grandes beneficiarios del proceso de neoliberalización concentrador y extranjerizante, se pueden adelantar algunos nombres que encabezan las familias más poderosas del país, la oligarquía nacional, pero también se tiene que agregar el conglomerado de grandes empresas multinacionales que sin radicar en el país, incluso sin conocerlo, controlan los hilos de la economía nacional.

Las dinámicas económicas propulsadas por la nueva clase empresarial, procreada por el poder político, dan cuenta del desvanecimiento del proyecto nacional y por el interés de afianzar el poder de clase. Algunas vertientes del socavamiento del aparato productivo nacional son las siguientes:

1. *Desmantelamiento del campesinado y empuje de los agronegocios.* La reforma agraria, y el ejido en particular, había sido el emblema de la economía mexicana posrevolucionaria. Alrededor de ella se había creado todo un sistema de subsistencia y estímulos estatales para la producción, distribución y consumo. No obstante, las reformas neoliberales destruyen ese legado histórico y plantean una disyuntiva insoslayable para millones de campesinos: o se convierten en empresarios agrícolas o emigran hacia zonas urbanas, donde la llamada economía informal será su receptáculo principal, o emigran hacia Estados Unidos para ocuparse mayormente en puestos laborales altamente precarizados. Con la bancarrota inducida de la economía campesina, emerge un mercado de tierras, que canaliza tierras de cultivo a esquemas de producción con vocación exportadora, cuando la productividad lo permite. Otra vía de escape es la mercantilización de tierras para detonar proyectos inmobiliarios, la mayoría para ofertar microcasas para el nuevo proletariado de las ciudades o exclusivas zonas residenciales, o desarrollos turísticos en zonas playeras.
2. *Inversión Extranjera Directa, el caballo de Troya.* La teoría de la competitividad neoliberal arguye que el factor clave del desarrollo es la entrada de inversión extranjera directa (IED), pues se supone que trae consigo elementos del progreso técnico que habrán de irradiar y dinamizar las economías en proceso de desarrollo. Sin embargo, en los hechos, los países centrales o desarrollados recurren a la exportación de capitales para obtener fuentes alternas

de ganancia, y más si es en condiciones privilegiadas: exenciones fiscales, fuerza de trabajo barata y transferencias gubernamentales de distinto signo. La mayoría de las veces, la IED destruye capitales nacionales, desarticula el mercado interno y se posesiona de sectores clave de la economía nacional, además de que muchas veces no realiza en realidad inversiones productivas sino que, bajo la política de privatización, se apropia de empresas con poder monopólico. La IED que arriba a México se canaliza hacia sectores manufactureros que disponen de abundante fuerza de trabajo barata y cuyas operaciones se basan en ensamblar partes. El mecanismo es importar la mayoría de insumos, tecnología, diseño, maquinaria y equipo y personal directivo, con el propósito de aprovechar la abundancia y baratura de la fuerza laboral y los múltiples apoyos gubernamentales como infraestructura, créditos, equipamiento, exención de impuestos, entre otros beneficios. Por lo que al final de cuentas se trata de una actividad poco remunerativa que exporta componentes con escaso valor agregado, y cuya dinámica tiene limitados o nulos encadenamientos productivos con otros sectores.

3. *Industria maquiladora de exportación.* La industria maquiladora se implanta en México desde los años sesenta, al concluir el Programa Bracero, que condujo a miles de trabajadores agrícolas temporales a Estados Unidos, toda vez que se había generado una escasez de mano de obra debido a la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada la conflagración, Estados Unidos sigue una estrategia de industrialización que contempla la ubicación de plantas industriales en lugares con abundante mano de obra barata. Estas plantas adoptan el modelo de maquila al constituir unidades de ensamble asociadas a procesos productivos internacionalizados con casi nula integración a la economía nacional. Por ello importan la mayoría de sus insumos y venden la mayor parte de su producción al extranjero. Si a ello se agrega que se basan en trabajo precario, queda claro que su impacto dinamizador sobre la economía doméstica tiende a reducirse a una derrama salarial exigua. No obstante el auge de las maquiladoras en la franja fronteriza y regiones aledañas, esta fuente ocupacional de trabajo barato ha experimentado un declive ante la emergencia de zonas con peores condiciones laborales, destacadamente en China.
4. *Sistema financiero y extranjerización de la banca.* El sistema financiero es un sector clave para detonar el desarrollo nacional a través de la derrama crediticia hacia el sector productivo. Pero bajo el modelo neoliberal, la banca de desarrollo prácticamente se desmanteló y la banca privada se vendió al capital financiero internacional, casi toda la banca comercial

en México es extranjera, salvo Banorte. Estos bancos cobran altas comisiones, no otorgan créditos para dinamizar la economía nacional en sus múltiples sectores y regiones, pero obtienen altos márgenes de ganancia, merced a sus prácticas rentistas y especulativas, que reportan a sus matrices en los países centrales (Estados Unidos, España, Gran Bretaña y Canadá), lo cual constituye en verdad una transferencia de recursos que obra en contra del proceso de acumulación nacional.

5. *Grandes corporaciones nacionales sin capacidad para detonar el desarrollo.* Las grandes corporaciones nacionales están concentradas en sectores primarios o rentistas que no cumplen con el papel de palancas del desarrollo. Es el caso de Cemex, Vitro o Telmex. En este rubro también se incluyen las empresas de telecomunicaciones, como Televisa, que cumple un papel ideológico al servicio del Estado. La excepción es Pemex, empresa monopólica estatal cuya renta petrolera es fuente abundante para la hacienda pública pero que está sometida a dinámicas de desinversión, corrupción y privatización encubierta. En contraste, la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) se debaten en un desarticulado mercado interno.
6. *Política económica bajo el modelo neoliberal.* A partir de la implantación de la política neoliberal, la economía mexicana se convirtió en una de las más abiertas de la OCDE, derivado de su ingreso al GATT en 1986 y de la instrumentación del TLCAN desde 1994. Los resultados no son muy halagüeños: la tasa de crecimiento real del PIB en los últimos 20 años ha sido netamente inferior a la de las dos décadas anteriores; las diferencias sociales se han expandido significativamente, los indicadores de justicia distributiva no mejoran, al igual que los índices de pobreza. En los últimos años se han agudizado algunos desequilibrios, tanto internos como externos, que obligan a una reflexión sobre los cambios necesarios en el modelo económico. En ese sentido, México se enfrenta a una encrucijada, donde se vislumbran dos posibles escenarios: el primero es el de las reformas estructurales, entendidas como agudización del modelo neoliberal dominante; el segundo es el de un cambio de modelo o de una sustancial modificación del actual.
7. *Macroeconomía del estancamiento.* El modelo neoliberal descansa en los supuestos de que el mercado es el agente principal para impulsar el crecimiento económico, que el libre mercado propicia procesos de convergencia económica entre países con distintos grados de desarrollo y que la privatización de los recursos naturales y productivos constituyen el mejor acicate para la inversión productiva, el crecimiento y la genera-

ción de empleo. No obstante, la evidencia empírica del caso mexicano nos demuestra que el neoliberalismo en realidad ha fracasado como motor propulsor del crecimiento, inversión y generación de empleo; sin embargo, ha sido exitoso para concentrar capital, riqueza y poder en pocas manos.

Regresión política

Uno de los síntomas más degradantes de la incipiente democracia electoral vigente en el país es la persistencia de prácticas orientadas al fraude electoral o al achicamiento de expresiones electorales alternativas al neoliberalismo. Los problemas de ingobernabilidad afloran como una consecuencia inevitable. La imposición del neoliberalismo en México tiene como pilar el fraude electoral que cerró el acceso al poder al candidato de la izquierda electoral Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, para imponer al derechista Carlos Salinas de Gortari, del PRI, que mantenía una hegemonía monolítica de setenta años, pero que había experimentado un viraje hacia el neoliberalismo. En ese periodo gubernamental se firma el TLCAN con Estados Unidos y Canadá, y se aplica con vigor fundamentalista las políticas del llamado Consenso de Washington. Entre otras políticas contrarrevolucionarias, se modifica el artículo 27 constitucional con miras a privatizar el ejido, se privatizan innumerables empresas paraestatales que jugaban un papel en la rectoría estatal de la economía, como Conasupo. Estas políticas tendrían continuidad en los posteriores periodos gubernamentales de los derechistas Ernesto Zedillo y Vicente Fox, este último representó la alternancia electoral, al concederle la presidencia de la República al Partido Acción Nacional (PAN), que para entonces comparte la ideología neoliberal con el PRI. Sin embargo, en las siguientes elecciones hubo múltiples indicios de que el triunfador fue el izquierdista Andrés Manuel López Obrador de la coalición Por el Bien de Todos; no obstante, el Estado no reconoció su triunfo, y pese a las anomalías registradas, y la cerrazón mediática de los medios impresos y audiovisuales, salvo algunas excepciones, se concedió la presidencia al panista Felipe Calderón, pues él representa claramente la continuidad del proyecto neoliberal comenzado en los ochenta con Miguel de la Madrid, asentado con Carlos Salinas y vigente hasta la fecha. Ambos episodios de la historia electoral mexicana demuestran que desde el poder no existe ninguna concesión y ningún interés para que arribe la oposición al neoliberalismo, porque consigo trae la posibilidad de cambiar el modelo de desarrollo nacional. En lugar

de ello, existe una simulación de alternancia política entre PRI y PAN, que, en el fondo, representan los mismos intereses.

Desde la óptica de la teoría de la transición política se promovió un llamado “voto útil” para apoyar el ascenso al poder de la derecha mexicana, que había sido funcional y adherente al modelo neoliberal impuesto desde el Estado mismo por el PRI, con el argumento de que se derrumbaría la prolongada hegemonía de ese partido y el advenimiento de un “cambio”. En apego a esa idea, los neoinstitucionalistas proclaman el fortalecimiento de las instituciones llamadas “democráticas”, mediante la reorientación de sumas millonarias del presupuesto para respaldar a la partidocracia, que está dominada por los intereses políticos del PRI y el PAN, con la aquiescencia de una constelación de partidos pequeños con órbitas satelitales, con el argumento de que el financiamiento público debe inhibir al privado, sin que esto sea verídico, además de apuntalar a un Instituto Federal Electoral (IFE), conformado por los intereses gubernamentales y partidistas. Algo similar ocurre con el Congreso de la Unión, cuya productividad social es muy limitada, pero es una zona de disputa de la clase política para distribuir el poder. El gasto público también fluye caudaloso para los organismos que supuestamente respaldan la justicia social, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyos actores principales atienden más a los intereses del poder político que a los de la ciudadanía a la que dicen representar, y cuyo gasto corriente es enorme, sin mencionar las fuertes sumas de dinero que devengan los magistrados y *ombudsman*. La idea de fortalecer a las instituciones del Estado, bajo el señuelo de una democracia trunca, ha concentrado recursos inconmensurables del erario público para fortalecer a la burocracia política, que se distancia cada vez más de un desarrollo alternativo, amén de que también capta recursos privados de los llamados poderes fácticos, que no son reconocidos de manera legal, pero que sí entrañan fuertes compromisos elitistas. De igual modo sucede con el Poder Ejecutivo, federal y estatal, y con los gobiernos municipales, que acopian grandes sumas del presupuesto para cubrir los ingresos de los funcionarios públicos y para ejercer partidas de manera discrecional, entre las cuales se contempla la promoción de la imagen personal de los políticos, que siempre tienen la aspiración de escalar posiciones y mantener un prestigio y fama pública a base de *marketing*. Esta concentración de recursos significa un desvío de recursos para promover el desarrollo social, fortalecer las capacidades productivas de las regiones y promover nuevas bases para el desarrollo nacional. La clase política antepone su propio interés, antes que el bien común.

La actividad política se pervierte para convertirse en una plataforma que favorece los intereses privados, de la élite social y la clase política. Los partidos políticos fungen como maquinarias electorales, como agencias de colocación y como entidades de legitimación del neoliberalismo. El debate político, el estudio de la realidad y la formulación de alternativas de desarrollo son deliberadamente postergadas para enfrascarse en la discusión de lo inmediato, de asuntos de corto plazo, a menudo orientados por el escándalo mediático y el chantaje político. El Estado y el sistema de partidos contemplan a la ciudadanía como una masa atónita, irrelevante y maniquea. El ciudadano es reducido a su mínima expresión, como un simple depositario de boletas electorales que convalidan el recambio de personajes políticos en los puestos de representación popular. La llamada política de desarrollo social se ha orientado a distribuir dádivas entre los sectores más vulnerables, no con el fin de reinsertarlos en el ámbito del trabajo, el consumo y la política, sino simplemente de contenerlo y moldearlos como bases sociales de legitimación electoral. En lugar de formar ciudadanos, se está formando poblaciones pedigüneas, desahuciadas e inconscientes. Los movimientos sociales son reprimidos, acosados, cooptados o desmantelados. La reciente estrategia de militarización, tiene, entre sus objetivos velados, la disuasión de los grupos políticos opositores.

México experimentó un proceso de alternancia electoral en 2000 que, a primera vista, significaba el derrocamiento del PRI luego de que había detentado la Presidencia de la República por más de siete décadas. Un folclórico y diletante político del PAN, Vicente Fox Quezada, se alzó con el triunfo inusitado, que propició un revuelo de campanas entre los analistas políticos que prontamente festinaron la transición política, haciendo parangones con el Pacto de la Moncloa. Entonces se dijo que el país estaba arribando a la democracia y la transición política. Poco se reparó en el hecho de que la verdadera transición aconteció al interior del propio poder político del Estado cuando, al cobijo de la presidencia encabezada por Miguel de la Madrid Hurtado, una camada de tecnócratas priístas reconvirtió el modelo de nación, entonces identificado con la ideología del nacionalismo revolucionario, la industrialización sustitutiva de importaciones y el Estado asistencialista o benefactor, para abrazar las consignas del Consenso de Washington propaladas por los organismos financieros internacionales e impulsadas en la región por Estados Unidos. El PAN había pactado una especie de cogobierno, desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, a nivel parlamentario, para profundizar la aplicación del modelo neoliberal. Por tal razón, la cesión de la presidencia de la República del PRI al PAN no repre-

sentó ninguna transición, simplemente un cambio de estafeta. Incluso, los gobiernos panistas están orientados por la misma tecnocracia neoliberal que no tiene empacho en cambiar la camiseta tricolor a la albiazul. La consigna política es permitir la alternancia entre partidos afines al proyecto neoliberal, pero no cederla a partidos o políticos que cuestionen su implementación.

El fantasma del fraude electoral se cierne sobre los comicios electorales cuando el ganador representa una alternativa, así sea moderada, como en efecto ha sucedido, al modelo neoliberal. Aunque oficialmente no se ha reconocido, en las ocasiones que se han registrado episodios de ese tipo, la autoridad electoral ha estado dominada, primero, por el propio aparato gubernamental, y en segunda instancia, por el aparato partidario vinculado al gobierno. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tráfuga de las filas del PRI, partido que abrazó el programa neoliberal, postulado por la coalición Frente Democrático Nacional, fue obstruido en su acceso al poder cuando, casualmente, el sistema de cómputo electoral “se cayó”. Posteriormente, en 2006, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Por el Bien de Todos, Primero los Pobres, fue derrotado por artimañas cibernéticas y campañas negras de la derecha, y ante la exigencia de transparentar las elecciones, mediante un recuento total de votos, el sistema electoral cerró filas para impedirlo y facilitar la continuidad del PAN en el poder.

Determinados sectores de la intelectualidad palaciega han reforzado el ideario derechista, que persigue legitimar a los gobiernos panistas y denotar la alternancia electoral de centro-izquierda, a la cual acusan de populista, beligerante y demagógica.

Históricamente, la corrupción ha sido el sello distintivo en el ejercicio del poder político en México. El PRI tiene ese estigma. Con el arribo del PAN se esperaba que, al menos, esa práctica fuera desterrada. Sin embargo, parece que se ha profundizado. Ya desde las campañas políticas se ha documentado el manejo turbio del dinero público y privado, de dudosa procedencia, para apuntalar a los políticos neoliberales. Ya en el poder, también se han registrado episodios turbulentos que aniquilan la presunta transparencia y rendición de cuentas.

La adopción del neoliberalismo como ideología de Estado, que abarca dos periodos priístas y dos panistas, ha consolidado un proceso de derechización política, que solidifica la presunción de que las desigualdades sociales son un incentivo para la actividad emprendedora. La ideología neoconservadora se aposenta en la cúspide del poder político, crece la influencia de sectores eclesiásticos y de los grandes medios de comunicación de talante conservador, al mismo tiempo que sociedades secretas ultraderechistas, como El Yunque, inci-

den en el partido gobernante. En tanto que el flanco izquierdo del espectro político nacional se corre hacia el centro y más allá. Los partidos autodenominados de izquierda, encabezados por el PRD, carecen de un programa político alternativo y de izquierda, en cambio canalizan sus energías para pactar alianzas electorales con la derecha gobernante y se desentienden de cualquier compromiso con los sectores sociales, sindicatos y movimientos obreros.

El ejercicio del poder político se ha caracterizado por lo que Dussel (2006) denomina fetichismo del poder. Es decir, se accede al poder, por los medios que sean necesarios, para ejercerlo de manera unipersonal, patrimonialista y elitista. No para concederle poder al pueblo. El pueblo es considerado como una masa sometida, manipulable, inculta e irrelevante. Por su parte, Fox sintetizó con claridad la consigna política, se trata de un “gobierno de empresarios, para empresarios”. Ésta ha sido la principal línea de conducción.

No deja de ser sintomático el hecho de que estos gobiernos recaben una buena dosis de votación popular, pese a que sus políticas son profundamente antipopulares. Para ello se implementan varias medidas exitosas electoralmente. Una de ellas es entronizar de manera reiterada, con un enorme gasto público, la imagen personal del presidente en turno, mediante un bombardeo indiscriminado de spots publicitarios en los medios audiovisuales, y también en los medios impresos de mayor circulación y afines al sistema, incluyendo revistas frívolas, también conocidas como del corazón. Los presidentes no tienen arrastre popular, pero sí un respaldo publicitario enorme. Incluso se ha llegado al extremo de rendir los informes de gobierno, ya no ante el auditorio compuesto por los supuestos representantes populares, diputados y senadores, sino ante una cámara de televisión en un set de filmación. Otra medida es la de otorgar dádivas a la población pobre, mediante programas asistencialistas, como Oportunidades (originalmente llamado Solidaridad y luego Progresá). Estos programas, que supuestamente tienen el objetivo de combatir la pobreza, meta en la que han fallado, cumplen el cometido de afianzar una base social electoral para el programa neoliberal y sus políticos.

En términos políticos, la ciudadanía en México se ejerce de manera muy limitada. Básicamente se reduce a la emisión del voto. Y si tomamos en cuenta las varias perversiones políticas que actúan tras bambalinas durante las campañas electorales, entonces esa participación es todavía más tibia o vulnerable. En general, la ciudadanía mexicana es proclive a la subjetividad conservadora. Ejercen un enorme peso entre la población los designios de la Iglesia católica, cuyas enseñanzas están situadas en el siglo XIX, no en el

XXI. Las otras iglesias que compiten en el mercado de la fe tampoco difunden una mentalidad muy abierta.

El sistema de educación pública se ha venido deteriorando de manera consciente por el Estado. La connivencia entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Estado no está encaminada a reformar progresivamente el sistema educativo nacional, sino a apuntalar el sistema de poder. Esta vinculación ha llegado al punto en que el sindicato dispone, para sus arreglos electorales, de un partido propio, el Partido Nueva Alianza (Panal). En tanto que su lideresa hace las veces de estrategia electoral y de secretaria de Educación. La educación pública constituye la piedra de toque de cualquier proyecto de desarrollo nacional, pero ante la evidencia de su desmantelamiento, la vulnerabilidad del país se acrecienta y pone en predicamento la viabilidad del país, en términos de autonomía, autodeterminación, y en la búsqueda de la democracia y el bien común social. Hoy por hoy, el sistema educativo no está formando ciudadanos libres, informados, críticos y propositivo, sino entes pasivos, incultos y sumisos.

Los partidos políticos también tienen una noción de ciudadanía muy restringida: se trata de bases militantes que acatan las decisiones de las cúpulas partidarias o, en su defecto, de la población que funge como consumidores del mercado político que acuden en tropel al llamado de las urnas. Los partidos no están formando ciudadanos, sino alianzas de poder tejidas por las cúpulas sin consultar, ya no digamos a la población en general, sino a su propia militancia. Es sintomático el hecho de que el PRD, que se dice de izquierda, esté empecinado en aliarse electoralmente con el gobernante PAN, de derecha neoliberal, para, supuestamente, evitar el retorno del PRI a la presidencia de la República. Tamaña ceguera podría considerarse como una ingenuidad, sin embargo, la cúpula del PRD tiene sus propios intereses, que no son los de la sociedad que dice representar. Buscan, ante todo, ganar recursos, reflectores y posiciones. En suma, poder fetichizado.

Colonización de la conciencia colectiva

Para afianzar el respaldo social al nuevo poder constituido, emerge un poder mediático o comunicacional cuyo propósito es el de sujetar a los sujetos sociales o el de colonizar las mentalidades, la conciencia colectiva. La destrucción de la identidad colectiva basada en el nacionalismo, que otrora constituía un referente imaginario de la mexicanidad y de la pertenencia a una nación, no ofreció grandes resistencias, dada la fuerza persuasiva de los medios electrónicos, que han ocupado un tiempo valioso de las más varia-

das clases y sectores de la sociedad. No se trata, tampoco, de hacer una añoranza de la ideología nacionalista del priato, pues se trataba de un proyecto autoritario, sectario, racista y excluyente. El problema es que ha sido suplido por uno todavía más pernicioso, la entronización del gran empresario y la consideración del grueso de la población como insumo productivo desechable. La desesperanza, el pesimismo y el descreimiento son estigmas del inconsciente colectivo, del estado de ánimo social a la baja.

La revolución en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), si bien no cumplió los presagios de una nueva era, el capitalismo informacional y los designios de una nueva economía direccionada por el índice tecnológico NASDAQ, sirvió para articular, desde una plataforma electrónica, el despliegue internacional de la llamada globalización neoliberal, que incluye estrategias como la internacionalización de la producción, la financierización y la militarización. Otro efecto importante es que contribuye a consolidar grandes corporaciones de la comunicación y la informática. Es el caso de empresas emblemáticas como Microsoft y Macintosh, que además de proveer de equipos de cómputo, venden los llamados software propietarios. Con la proliferación de Internet también se expanden las llamadas empresas.com (google.com, yahoo.com, etcétera) y se generan nuevas formas de comunicación, las llamadas redes sociales (*twitter*, *facebook* y otras), que conectan electrónicamente a personas que, ubicadas frente a su computadora, tienen la sensación de estar generando amistades y generando circuitos de comunicación, pero paradójicamente se está debilitando la comunicación cara a cara.

En el centro de esta oleada tecnológica radica un nuevo poder comunicacional. A trasmano de la fascinación que ejercen los mecanismos de la comunicación virtual, se intensifica la formación de monopolios u oligopolios de la comunicación, que detentan la propiedad de las grandes empresas de televisión, radio, cine y prensa, además de las empresas controladoras de la comunicación virtual. Estas corporaciones están alineadas a los grandes centros del poder económico y político, a nivel nacional, incluso internacional. Su función social es decisiva, porque tienen un gran poder de penetración en las audiencias. En tanto que son la principal fuente de información para la mayoría de la población, representan la principal fuente que moldea la conciencia colectiva, que direcciona la opinión pública, que produce el sentido común popular. Son los grandes productores de cultura que han desbarrancado al sistema de educación pública. Los grandes medios de comunicación de masas tienen, entonces, la inapreciable función de colonizar la conciencia colectiva. Estos medios dicen a su auditorio qué creer, qué

pensar, qué comprar, qué querer, qué odiar, cómo divertirse, cómo vestir, por quién votar, a quién idolatrar.

Los medios de comunicación masiva, principalmente los electrónicos, se han consolidado como un instrumento fundamental del poder económico y político en México.¹⁸ En el sector se ha concentrado fuertemente la propiedad sobre estos medios. Televisa y TVAzteca detentan el duopolio de la televisión abierta: controlan el 95 por ciento de las concesiones televisivas (*El Economista*, 11 de septiembre de 2009), lo que se traduce en el modelo comunicacional más concentrado del mundo.¹⁹ Estas empresas siguen un mismo patrón: ofertar programas televisivos de ínfima calidad para el divertimento de la mayoría de la población, que fue considerada, por Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre”, como la población “jodida”: telenovelas, deportes, espectáculos y noticiarios adocenados. Las televisoras privadas disponen de una gran penetración entre amplios contingentes sociales, y merced a que representan su fuente primordial de información, amasan un poder enorme. Su programación está confeccionada de tal forma que manipulan la información, la ocultan o tergiversan. Incluso se han registrado múltiples episodios bochornosos donde la noticia se disfraza para, mediante campañas diseñadas por los directivos, asestar golpes mediáticos a enemigos políticos y económicos, en aras de defender sus intereses corporativos. No conceden espacio a visiones críticas ni exploran temas de interés nacional. Generalmente, su línea editorial es armonizada entre ambas emisoras y reproduce la visión e intereses de los gobernantes y de los poderes económicos.

En la radio comercial también son pocos los grandes medios que tienen una presencia nacional: 76 por ciento del sector radiodifusor está en manos de 14 familias y sólo cuatro cadenas aglutinan casi la mitad de las emisoras del país (48 por ciento) (*El Economista*, 11 de septiembre de 2009). Los grandes concesionarios han sido beneficiados por los gobiernos para preservar y acrecentar sus concesiones. Las grandes cadenas radiofónicas están en sintonía con los medios televisivos, no sólo por sus contenidos, sino porque muchos de sus principales voceros son también los locutores de la televisión. A la vez que se cierra el paso para los medios comunitarios, donde se expre-

¹⁸La inversión en publicidad comercial y política es un medio preciado para seducir a las masas. Bajo este rubro se ejercieron en el país la cantidad de \$44.9 mil millones, en su mayoría (60 por ciento) canalizados a la televisión abierta y una porción menor a la televisión restringida (3.2 por ciento), en tanto que casi 38 por ciento a “otros medios”. El gasto publicitario del gobierno federal destinó el 90 por ciento al duopolio de la televisión (*El Economista*, 11 de septiembre de 2009).

¹⁹En otras regiones, como Europa, ninguna compañía televisiva puede detentar más del 20 por ciento de las frecuencias concesionadas, o en Estados Unidos puede superar el 30 por ciento, pero en México, sólo Televisa controla el 72 por ciento (*El Informador*, 4 de mayo de 2010).

san voces del medio rural y urbano que no están ligadas a los poderes económicos, y están más cercanos a los sectores populares. Asimismo, se deteriora el sistema de radio pública. En contraste, se desata un ataque velado en contra de periodistas y espacios noticiosos que cumplen algunas funciones críticas.²⁰

En la prensa escrita también son pocos los medios que dicen tener una cobertura nacional: *El Universal*, *Excelsior*, *La Jornada*, *Reforma*, *Milenio*, *El Financiero*. Entre las revistas, llama la atención que las de mayor distribución sean las revistas frívolas, como *TVyNovelas*, de Televisa. Las revistas sobre temas políticos, como *Proceso* y en menor medida *Contralínea*, alcanzan gran distribución, pero no tanta como las del chisme de los espectáculos. Las revistas científicas, que desmenuzan con mayor detenimiento temas económicos, políticos y sociales, se constriñen a un sector académico que sigue determinadas lecturas, según su área de especialidad. En este punto, es destacable la labor de sitios web que permiten el acceso libre a artículos académicos, como Redalyc (redalyc.uaemex.mx), E-journal (<http://www.ejournal.unam.mx/>) y Scielo (<http://www.scielo.org>).

Los medios de comunicación de masas reclutan a intelectuales mediáticos, generalmente arremolinados alrededor de las posturas más conservadoras y neoliberales. Algunos grupos de intelectuales organizados, como *Nexos* y *Vuelta*, se disputan los puestos de privilegio en las televisoras, y se presentan ante el gran público como la representación viva del intelectual independiente y responsable, cuando sus vínculos gubernamentales son férreos y determinantes. Estos intelectuales abogan por las llamadas “reformas que el país necesita”, es decir, la profundización del programa neoliberal: más privatización, reforma laboral, fiscal, etcétera. Asimismo, las posturas críticas son caricaturizadas o invisibilizadas.

El periodismo se ejerce como un negocio, antes que como un servicio informativo al público. Además, los medios de comunicación no son instancias democráticas, pese a que exigen, en apariencia, que la sociedad lo sea. Las líneas editoriales son celosamente diseñadas de conformidad a los compromisos económicos y políticos de los directivos y dueños, no según las necesidades sociales de información.

Los medios constituyen un poder fáctico que intenta imponer su propia agenda política. Es conocida la intromisión en el ámbito parlamentario, a

²⁰Es el caso de José Gutiérrez Vivó, de Radio Red y Monitor, que en su momento encabezaba una de las emisiones radiofónicas de mayor audiencia, pero que fue sacado del dial. Algo similar sucedió, temporalmente, con Carmen Aristegui. Son contados los espacios noticiosos críticos o al menos imparciales. La inmensa mayoría de la industria del periodismo reproduce el discurso del poder.

través del PVEM, de la *telebancada*. Los conglomerados de la comunicación ejercen una gran presión entre los principales partidos para defender sus intereses. Ya han logrado que se les otorguen concesiones para incrementar su presencia mediática o para hacer negocios.

En las campañas electorales, que significan una enorme erogación de recursos públicos, los grandes medios de comunicación resultan los grandes beneficiarios, pues el grueso de los gastos de campaña se destinan a la compra de espacios publicitarios. Son entradas de recursos que se comparan con las temporadas de alta audiencia, como los mundiales de fútbol o los Juegos Olímpicos.

Insustentabilidad social

El sistema capitalista es, por definición, insustentable en términos sociales y ambientales. También lo es en términos económicos para la mayoría de los pequeños productores y comerciantes. La tendencia secular es hacia la monopolización. Las grandes corporaciones del capital amasan la mayor parte de la riqueza generada gracias a múltiples esfuerzos sociales y al respaldo decisivo del Estado. La mayoría de la población afronta toda suerte de problemas: enfermedades, epidemias, crisis, desempleo, pobreza, hambruna, catástrofes naturales, violencia, explotación, despojo, opresión. Por ello es importante la configuración política del Estado, que puede jugar un papel que respalde socialmente a los desposeídos y excluidos o puede desentenderse de su responsabilidad social y obrar en beneficio casi exclusivo del capital. Esta última es la trama del neoliberalismo, cuyo objetivo principal es generar nuevas fuentes de riqueza y maximizar las ganancias de los grandes capitales.

En México, un problema central es la expansión de las desigualdades sociales. Para el sistema neoliberal, las desigualdades sociales no son realmente un problema, ni siquiera en el plano moral, sino que más bien son un incentivo para la acumulación de ganancias. De manera directa, el abaratamiento laboral y el desempleo masivo contribuyen a incrementar los márgenes de ganancia y son un estímulo para la inversión. Los gobiernos promueven una estrategia “agresiva” de atracción de inversión privada, principalmente extranjera, que contempla, como atractivo principal, la abundancia y baratura de la fuerza de trabajo, para ello se asegura, además, un clima laboral envidiable, que significa el control político de los trabajadores: cero huelgas, bajos salarios, desindustrialización, represión policiaca, si es necesario. De manera indirecta, el desmantelamiento del Estado social se exige para direccionar caudalosos recursos públicos no al llamado gasto social, sino a la inversión

en infraestructura productiva, al financiamiento de proyectos privados, al “rescate” de empresas privadas en bancarrota y otros mecanismos de transferencia de recursos públicos a la órbita privada.

Los rasgos básicos de la insustentabilidad social en México son múltiples. El desempleo estructural resulta un rasgo consustancial de la economía mexicana, que es maquillado por las cifras oficiales de “desempleo abierto” y atenuado por el empleo informal y la migración. El desempleo es propiciado por el propio modelo, que considera redundante, para la obtención de la máxima ganancia, al grueso de la población. Los “sectores de punta”, que lideran el modelo exportador, merced al patrón tecnológico importado, prescinden de amplios contingentes laborales. También el Estado genera desempleo o lo consiente, como estrategia privatizadora o como estrategia depurativa.²¹ Por otra parte, sectores completos de la economía sucumben, porque no pueden competir con los grandes capitales, y arrojan a las filas del desempleo a otro contingente importante. Además, el llamado sector de subsistencia es desmantelado progresivamente por la contrarrevolución neoliberal. Por lo que, en conjunto, se aglutina una gran masa de desempleados que compiten con los empleados por la economía formal al grado que aceptan el descenso de sus condiciones laborales, para no ser desplazados del mercado laboral. La situación ha llegado al punto en que ser empleado no significa dejar de ser pobre. La mayor parte de los empleados formales son pobres.

La pobreza es el signo distintivo del neoliberalismo. En México se estima, según fuentes oficiales, que sólo el 19.3 por ciento de la población se considera como “no pobre y no vulnerable”, el 80.7 por ciento restante se distribuye en diversos rangos de pobreza (46.2 por ciento) y vulnerabilidad (34.5 por ciento) (Coneval, 2011). Sin embargo, analistas críticos de los métodos oficiales de medición de pobreza refieren que en el país la pobreza cubre, sin discriminar “vulnerables”, al 82.9 por ciento de la población (Boltvinik, *La Jornada*, 12 de agosto de 2011). No obstante, la mayor parte del debate sobre pobreza se ha orientado hacia los métodos de medición, como si la pobreza fuese un problema estadístico. No se discute el modelo neoliberal a fondo, como modelo generador de pobres. Incluso el modelo festina que México tenga una buena posición en desarrollo humano. Según el Programa de

²¹Ejemplos de lo anterior son, por una parte, el desmantelamiento de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLYFC), cuyo contrato colectivo era detentado por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Se echaron a la calle a más de 40 mil electricistas bajo el argumento de que el sindicato era una carga para la empresa paraestatal, cuando en realidad las intenciones son las de privatizar a la empresa, como en efecto sucedió con la concesión de fibra óptica a la empresa Televisa. Otro ejemplo es el caso de la empresa Mexicana de Aviación, que había sido privatizada en condiciones muy favorables, pero que ahora se declara en quiebra, y los nuevos inversionistas reclaman, para su rescate, el despido de la mayor parte del personal.

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2010 México se ubica entre los países con un mediano índice de desarrollo humano (IDH): ocupa el lugar 56 mundialmente y la quinta posición en América Latina, luego de Chile (45), Argentina (46), Uruguay (52) y Panamá (54), y adelante de Costa Rica (62), Perú (63) y Brasil (73). Desde esta óptica estadística, fría y abstracta, el modelo parecería ser moderadamente exitoso o levemente fallido, según se vea el vaso medio lleno o medio vacío.

El padecimiento de enfermedades curables es un síntoma de la deuda social del neoliberalismo. Por una parte, el IMSS y el ISSSTE, que cubren a la mayor parte de la población asegurada del país, atraviesan por un estado degradante: brindan una atención médica deficiente, tienen hacinamiento, infraestructura obsoleta y falta de medicamentos. Esto contribuye, de manera encubierta, a la privatización de los servicios de salud. Gran parte de los derechohabientes tiene que recurrir, en contra de su voluntad, a la atención médica en hospitales, clínicas y consultorios privados. La paradoja estriba en que muchas veces, los mismos médicos que atienden en el servicio público, canalizan a sus pacientes a sus consultorios privados, para garantizar una atención pronta y eficiente. La gran mayoría de la población, al estar excluida del empleo formal, no tiene acceso al seguro médico. El gobierno instrumentó el llamado Seguro Popular que vino a empeorar el sistema de salud público, pues no generó infraestructura nueva ni contrató a nuevo personal ni abasteció las farmacias de medicamentos, sino que simplemente montó sobre la misma estructura del IMSS e ISSSTE al Seguro Popular, con lo que empeoró sensiblemente el servicio médico. Esta estrategia conduce claramente a la mercantilización de la atención médica. La población pobre que no tiene acceso al seguro social, o que contando con él no tiene acceso a los medicamentos, por desabasto o por alto costo, constituye un ventajoso nicho de mercado para los laboratorios y farmacias de medicinas similares, que distribuyen medicamentos a bajo costo (aproximadamente 70 por ciento menos que las de patente), pero sin ofrecer garantías de que la sustancia activa sea legítima y eficaz. La desatención gubernamental en el abasto de medicamentos para los sectores populares ha procreado, entonces, un negocio fabuloso que lo acapara Farmacias Similares (el Dr. Simi), cuyo propietario es familiar de los “dueños” del PVEM, partido satélite del PRI. En el otro estrato de consumo, las medicinas de patente están controladas por las grandes farmacéuticas y por grandes distribuidores, que venden medicamentos a altos costos. Una familia pobre y sin seguro social queda prácticamente

en bancarrota cuando alguno de sus miembros contrae una enfermedad cuya atención requiere la compra de medicamentos caros.²²

El sistema educativo nacional muestra un grave deterioro. El profesorado padece bajas remuneraciones y forma parte de un sindicato, el SNTE, que es el más numeroso de América Latina, pero también uno de los más corruptos y oportunistas, que hace un uso electorero de su membrecía, como base electoral que se oferta a políticos y partidos en las contiendas, al punto en que ya formó su propio partido, el Panal, cuya pretensión no es disputar el poder político ni modelar un proyecto de nación, ni siquiera en el rubro educativo, sino simplemente servir de comparsa electoral en el plano local, estatal y federal con partidos afines, como el PAN y el PRI, y minar las fuerzas electorales de candidatos populares de la izquierda, como AMLO. Los grandes monopolios alimenticios, productores de la comida chatarra, tienen prácticamente intervenidas a las escuelas como principales proveedores de alimentos chatarra. Las cooperativas escolares y las cafeterías, además de las máquinas despachadoras, distribuyen productos con bajo valor nutricional y alto contenido calórico, tales como refrescos, pastelillos y botanas. Estos pseudoalimentos trastocan sensiblemente el gusto alimenticio de los infantes y los forma como consumidores compulsivos de estos productos, lo cual redundará en problemas de salud pública, como la obesidad, diabetes e hipertensión. Grandes empresas como Coca-Cola, Pepsico, Bimbo, Ricolino y Jumex aportan grandes cantidades de dinero a las campañas políticas electorales, como sucedió con el respaldo a Felipe Calderón, por lo cual adquieren un compromiso gubernamental de no ser desterradas de los planteles educativos. Además, estas empresas firman convenios con los directivos escolares para, a cambio de ofertar abierta y permanentemente sus mercancías, realizar algunas obras mínimas en los planteles, como pintar las canchas deportivas o hacer algún donativo en especie. La infraestructura educativa de los planteles de educación básica, media y superior es muy limitada, desde las aulas y su equipamiento, pasando por las áreas de uso común, hasta los sanitarios, laboratorios, bibliotecas y espacios deportivos. Los resultados educativos están a la vista: baja capacidad de comprensión de lectura, magros conocimientos en matemáticas e historia. Por otra parte, no se está formando a los estudiantes en artes, deportes y ciencias. También hay problemas de deserción escolar y una pérdida de autoestima entre los estudiantes, pues la edu-

²²Un proyecto legislativo en discusión pretende otorgar vales a los derechohabientes para adquirir medicamentos en farmacias privadas, cuya propiedad es de familiares de los propietarios del partido que postula esa iniciativa (PVEM), lo cual representa un evidente conflicto de intereses. En lugar de fortalecer el sistema de seguridad social, se propone canalizar más recursos a los grandes consorcios farmacéuticos.

cación formal ya no forma parte de los mecanismos de ascenso social, por lo que la percepción generalizada es que acudir a la escuela es una pérdida de tiempo.

La población pobre destina la mayor parte de sus recursos a la alimentación. Se estima que 28 millones de mexicanos padecen hambre, de los cuales, 11.2 millones no pueden cubrir la canasta de alimentos tasada en 864 pesos mensuales por el Coneval, ésta es la línea de pobreza extrema. Este problema no sólo es de consumo y pobreza, sino también de producción. El horizonte vital se reduce a cubrir los mínimos de subsistencia, sin mejorar la calidad de vida. Con la destrucción del Estado social, que garantizaba un mínimo de producción y distribución alimentaria canalizada a los sectores populares, el sistema alimentario está controlado por las grandes empresas agroindustriales y cadenas de supermercados, cuyo cometido no es satisfacer las necesidades alimenticias de la población, sino generar la mayor cantidad posible de ganancia, lo cual incluye incrementar los precios y especular con el abasto y distribución de alimentos. Los más pobres no acceden a una alimentación sana y nutritiva. El mercado de consumo está dominado por las grandes empresas, que se valen de profundas campañas publicitarias, sobre todo en la televisión, del control de la venta de alimentos en las escuelas públicas y privadas y del control en los sistemas de venta de los micro y pequeños comercios asentados en las colonias populares, para vender masivamente los alimentos chatarra. México ha perdido soberanía alimentaria, pues ésta ha sido entregada a las transnacionales y grandes corporaciones nacionales. Un ejemplo es la guerra de la tortilla, por la cual el grupo Maseca, propietario de Banorte, controla ya la mitad del mercado de la tortilla, y esto se ha traducido en alzas recurrentes del precio.

Sobre la cuestión ambiental, el grueso de la discusión se ha centrado en el cambio climático, al cual se le atribuye una alta dosis de científicidad y causales puramente técnicas, una expresión global sin asideros locales y con soluciones ancladas en el mercado. El problema es, sin embargo, más complejo, amén de que hunde sus raíces en los desvaríos de la estructura social prevaleciente. Las catástrofes naturales, como inundaciones, sequías y heladas, afectan a la población que habita en zonas con infraestructura deficiente y escasa capacidad de respuesta institucional, pero también representan una calamidad para los productores rurales, sobre todo los minifundistas temporaleros, que son altamente dependientes de las inclemencias climatológicas. En las grandes concentraciones urbanas, los terremotos e inundaciones afectan a la población más vulnerable, que ha-

bita en lugares inapropiados, en casas construidas con malos materiales y que viven en hacinamiento, en gran parte por la voracidad de fraccionistas y especuladores inmobiliarios. La población pobre que no dispone de recursos propios para afrontar las adversidades pierde, en un instante, su precario patrimonio familiar. Además, el Estado se desentiende de su responsabilidad para prevenir catástrofes y exhibe una escasa capacidad de respuesta ante su presencia. Pero no todas las catástrofes son de índole natural. Tómese en cuenta que el medio ambiente primario para la humanidad es la propia sociedad, más específicamente la maraña de relaciones sociales. Los ritmos de producción impuestos por la organización económica capitalista exigen que los recursos naturales se vean como una ventaja comparativa que tiene que explotarse con la mayor celeridad posible. La extracción incesante de recursos naturales, la apropiación de los ecosistemas y de la biodiversidad generan un ritmo de devastación que no permite la regeneración del entorno, sino su destrucción. Las principales poblaciones afectadas son las más pobres, pues los bienes comunes localizados en sus territorios se los apropian las corporaciones y los mercantilizan, sin importar los problemas ambientales y sociales derivados.

Esbozos de resistencia y rebelión

El Estado ha desentendido al sector agropecuario, en particular al campesinado, para ceder los hilos de conducción a las grandes multinacionales, como Monsanto, que comandan el sistema agroalimentario mundial. En este sentido, el Banco Mundial (2007) ha sugerido a los campesinos pobres que para superar su pobreza tienen tres caminos: convertirse en agroempresarios, buscar empleo en el medio urbano o emigrar a Estados Unidos. La última salida parece ser la más socorrida.

La alternativa política al neoliberalismo en México se ha tejido desde diferentes frentes, pero no de manera articulada, incluso a menudo de manera confrontada y autodestructiva. El movimiento El Barzón, conformado por los sectores medios del campo, ante la explosión de la cartera vencida y en general el abandono al agro nacional por el Estado, significó un llamado importante para cuestionar la insustentabilidad social en el ámbito rural. Este movimiento fue decayendo, y se incorporó a las filas del PRD, donde sus líderes han desempeñado puestos de representación popular, pero su vigor social ha disminuido sensiblemente. Más recientemente, la estafeta la ha tomado el movimiento El Campo no Aguanta Más y la campaña Sin Maíz, no hay País. En este sector, es significativa la persistencia de investi-

gadores a la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER), que desde múltiples disciplinas e instituciones no quitan el dedo del renglón para hacer un llamado sobre el papel estratégico del campo en el desarrollo nacional y la necesidad concomitante para rescatarlo. En el ámbito periodístico, también es relevante el suplemento *La Jornada del Campo*, dirigido por Armando Bartra.

El EZLN irrumpió en el plano nacional e internacional justo en una fecha neoliberalmente emblemática, el 1 de enero de 1994, cuando se puso en marcha el TLCAN. Primero causó estupefacción y dudas. Luego generó enormes simpatías entre los sectores urbanos y universitarios, en México y el extranjero. El hecho de que un movimiento precariamente armado e integrado por indígenas campesinos pobres de la selva Lacandona de uno de los estados con mayor pobreza del país, Chiapas, desafiara al Estado constituyó un poderoso acto político, con mucho contenido simbólico e ideológico, que desbancó a los partidos políticos y medios de comunicación en sus intentos por llamar la atención acerca de los problemas nacionales. Por un buen periodo, la agenda política estuvo marcada por el EZLN, gracias a la habilidad comunicacional de su líder, el subcomandante Marcos. Este movimiento generó una gran expectativa, pero no logró movilizar a la población nacional. Consiguió atraer la atención de intelectuales del mundo, promovió foros de discusión y organizó a las comunidades bajo formas de autogestión. Sin embargo, su presencia mediática, como era predecible, fue decayendo. Más aún, causó muchas suspicacias los desplantes de su dirigente, sobre todo en la campaña presidencial, cuando denostaba a Andrés Manuel López Obrador. No deja de ser interesante que el movimiento suscitara, entre los analistas afines, las más diversas explicaciones, desde que era un movimiento guerrillero indígena campesino, un movimiento altermundista y antineoliberal, pasando por un movimiento socialista, hasta una organización comunitaria posmoderna. Quizá por concitar la unción de la diversidad, pero sin mostrar un proyecto político orientador claro, en lugar de promover la unidad en torno a un proyecto nacional, algunos de los personajes más conspicuos del movimiento se fueron separando, en tanto que los que se quedaron reclaman la pureza ideológica de sus integrantes.

El movimiento cívico electoral encabezado por Andrés Manuel López Obrador tal vez sea el último movimiento social alternativo en México. Su programa de gobierno, denominado proyecto alternativo de nación, contiene elementos para un ejercicio gubernamental nacionalista, moderado, de centro-izquierda. No es una agenda de transformación social, ni promete un cambio radical en el modelo nacional. La proclama central, “Por el bien de

todos, primero los pobres”, parece no estar del todo bien plasmada en el programa de gobierno. Sin embargo, los sectores de derecha y ultraderecha denostaron a este personaje político al grado que no tuvieron el menor empacho de acusarlo de ser “un peligro para México”. En este cometido, contribuyeron abiertamente los grandes monopolios nacionales y extranjeros, destacadamente la televisión privada y el Consejo Coordinador Empresarial. La guerra sucia electoral estuvo cargada de resentimientos clasistas y la propagación del odio como herramientas de persuasión, nunca el debate de ideas ni la presentación de propuestas de gobierno. La precarización de la actividad político-electoral parece que no podría caer más bajo.

El punto crítico aquí es que el sistema de poder y su sistema de partidos están organizados, en México, a fin de preservar el modelo neoliberal, es decir, los grandes intereses oligárquicos, y de paso preservar los privilegios de su clase política, independientemente del lugar que ocupen en el espectro político. Esta situación coloca al país, en el contexto de América Latina, y frente a la hegemonía político-militar de Estados Unidos, en la bolsa de países aliados de ese país y preservan un modelo económico-político depredador e injusto, junto a Colombia, Perú, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Chile. En contraste, un grupo de países enarbola posiciones que contemplan programas reformistas, con cierto contenido social, como es el caso de Brasil, Uruguay y Argentina. Más aún, otros países plantean reformas un poco más profundas, como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Casos como el de Cuba, con media centuria de proyecto socialista, representan un modelo político-social bien conocido, que se coloca en el otro extremo del neoliberalismo.

Conclusión: profundización del subdesarrollo y la dependencia

Una forma de entender el papel asignado a la economía mexicana bajo el neoliberalismo y la integración regional asimétrica es la categoría de modelo exportador de fuerza de trabajo barata y recursos naturales. Bajo esta denominación se explica que México se reestructura para ser una economía exportadora, pero en lugar de exportar manufacturas elaboradas con insumos y recursos nacionales, se configura una plataforma de exportación donde son las empresas estadounidenses, europeas y asiáticas las que exportan desde México hacia Estados Unidos, y en menor medida hacia otros países. Las empresas mexicanas se subordinan ante esta nueva estructuración económica. El punto crítico de esta exportación consiste en el bajo

contenido nacional de las mercancías exportadas, pues la mayoría de sus ingredientes son importados: insumos, maquinaria, tecnología, diseño y directivos. El componente nacional principal es la fuerza de trabajo barata. El esquema productivo predominante es el del ensamblaje. En tal sentido, lo que a fin de cuentas exporta el país es fuerza de trabajo barata, como uno de los componentes de las mercancías de exportación.

El modelo económico profundiza el desarrollo y la dependencia nacional, en los siguientes términos:

1. *Dependencia tecnológica.* El modelo económico orientado a la exportación por corporaciones extranjeras ha relegado la generación de conocimiento científico-tecnológico como cimiento para la producción, ante la falacia de que la inversión extranjera constituye la correa de transmisión para el progreso tecnológico. La exigua capacidad para generar innovación se la apropian las corporaciones privadas extranjeras, que financian los proyectos de investigación y patentan los hallazgos. Los esfuerzos de investigación de las universidades públicas están siendo capitalizados por los grandes monopolios. No se ha desarrollado tampoco una capacidad social para apropiarse de los conocimientos científicos y de las mejoras tecnológicas. Los procesos de enseñanza se están reconvirtiendo paulatinamente para formar un llamado “capital humano”, es decir, un recurso humano formado técnicamente para satisfacer las necesidades del capital, sin compromiso social ni voluntad política de cambio. Los grandes monopolios y oligopolios están controlando la formación de recursos humanos, los proyectos de investigación y el sistema de patentes. El país pierde soberanía en el ámbito del conocimiento y la tecnología.
2. *Pérdida de soberanía laboral.* El sector laboral mexicano se integra como un apéndice del mercado laboral estadounidense. Primero, como un reservorio de trabajo abundante y barato susceptible de ser explotado por las corporaciones extranjeras que penetran la economía nacional, bajo esquemas productivos como las maquiladoras o el empleo precario de empresas extranjeras. En segundo lugar, con la incorporación de trabajadores inmigrantes mexicanos en la economía estadounidense. El modelo económico nacional se especializa en la exportación de fuerza de trabajo barata. En todo caso, el modelo económico actual ha perdido la capacidad de generar las fuentes de trabajo formal de calidad que demanda la población en edad laboral. Esta incapacidad se presenta en los momentos en que el país está generando un “bono demográfico”,

es decir, una sobreoferta de población joven que reclama un lugar en el mercado laboral. Este bono, en otras condiciones, podría fungir como una fuerza estratégica para impulsar dinámicas de desarrollo, pero en las actuales condiciones, este bono se está dilapidando, porque se considera un banco poblacional redundante, sin lugar en el ámbito del trabajo, el consumo y la ciudadanía. El modelo económico está derrochando de manera persistente su recurso más valioso, la fuerza laboral.

3. *Desmantelamiento de la soberanía alimentaria.* El país ha perdido la capacidad de producir los alimentos que necesita la población, otorgar viabilidad socioeconómica a las unidades productivas rurales, generar empleos en el medio rural y promover la sustentabilidad. El sector se ha abierto al mercado internacional, y se perdió la producción de alimentos básicos (maíz, frijol, lácteos, etcétera) para recurrir a la importación indiscriminada. El modelo promueve la exportación de productos no tradicionales, como frutas y verduras. Pero en muchos casos, la exportación de estos productos es dominada también por empresas transnacionales, como sucede, por ejemplo, con el aguacate michoacano y el tequila.
4. *Vulneración de la soberanía financiera.* El sistema de pagos, ahorro y crédito está dominado por la banca privada. Los principales bancos son extranjeros: BBVA-Bancomer (España), Banamex (Citigroup, Estados Unidos), Santander (España), HSBC (Gran Bretaña), Scotia Bank (Canadá). Sólo un banco es de base nacional (Banorte). La actual configuración de la banca está precedida de un fraude monumental que fue subsanado con recursos públicos, bajo el Fobaproa (ahora IPAB), que representa una enorme deuda. El crédito está prácticamente cancelado para las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES). En tanto, los usuarios de la banca son sometidos a cobros y tarifas indebidas, y servicios como las tarjetas de crédito se ofrecen a tasas de interés estratosféricas que producen una sangría a las finanzas personales y familiares. La banca privada extranjera obtiene grandes márgenes de ganancia, incluso lo hizo en los momentos en que la crisis financiera era más severa: al grado que las sucursales bancarias estaban subsanando las pérdidas de las casas matrices, como sucedió con el caso de BBVA-Bancomer de México con BBVA de España. No obstante, el sector popular, que habitualmente no es sujeto de crédito, también ha sido configurado como un mercado apetecible para la llamada nueva banca, es el caso de Banco Azteca y Bancoppel, que ofrecen servicios de ahorro y préstamo y transferencias de dinero con tarifas altas. En este esquema también entran empresas como Elektra y Famsa.

5. *Extractivismo de recursos naturales.* Recursos naturales como minerales, petróleo y maderas son saqueados a bajo precio. Las empresas mineras están aposentadas en el país. Desde diciembre de 2000 hasta el primer cuatrimestre de 2010, los gobiernos panistas han otorgado más de 24 mil concesiones para la explotación de minas. Tan sólo en el primer cuatrimestre, Felipe Calderón ha autorizado la explotación de oro, plata y cobre a 231 compañías extranjeras, entre las que destacan Azure Minerals y Almaden Minerals. La mayoría de los corporativos favorecidos tienen sus sedes en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, pese a que las leyes sólo contemplan las explotaciones para mexicanos, ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas. De manera velada, Pemex ha sido saqueada, en parte porque el régimen fiscal ocasiona una sangría de recursos que cancelan las posibilidades de inversión de la empresa, y en parte porque áreas estratégicas y rentables de la empresa están siendo concesionadas a intereses privados.

Las añoranzas de modelos pasados, como la industrialización por sustitución de importaciones, el régimen de partido de Estado y la ideología del nacionalismo revolucionario, más que una progresión social, significan un retroceso. No sólo en el plano teórico, donde se evade la necesidad de avizorar escenarios de transformación social, sino porque se convalida la restitución del poder ancestral, autoritario, el cual no necesariamente se ha trastocado, pero su reinstalación significaría su legitimación retardataria.

Peor aún es preservar el modelo neoliberal. En su defensa, incluso de manera velada o ingenua, se dice que el tal neoliberalismo es una referencia difusa, un espécimen ideológico, un esquematismo analítico o un reduccionismo del pensamiento. En esa posición hay una dosis de verdad, por cuanto suele abusarse de un determinismo explicativo para la totalidad de problemas sociales, pero por el otro lado, hay una pretensión de conculcar el análisis crítico de la realidad o de abordar parcelas de ella, sin buscar la integralidad de los procesos.